



TEXTOS APROBADOS

P9_TA(2022)0222

Informe de 2021 sobre Turquía

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2022, sobre el Informe de 2021 de la Comisión sobre Turquía (2021/2250(INI))

El Parlamento Europeo,

- Vistos la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2021, sobre la política de ampliación de la UE (COM(2021)0644) y el Informe de 2021 sobre Turquía que la acompaña (SWD(2021)0290),
- Visto el Reglamento (UE) 2021/1529 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de septiembre de 2021, por el que se establece el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III)¹,
- Vistos el marco de negociación con Turquía, de 3 de octubre de 2005, y el hecho de que la adhesión de Turquía a la Unión, al igual que en el caso de todos los países candidatos, depende del pleno cumplimiento de los criterios de Copenhague, así como la necesidad de normalizar sus relaciones con todos los Estados miembros de la Unión, incluida la República de Chipre,
- Vistas la declaración de la Comunidad Europea y sus Estados miembros de 21 de septiembre de 2005, como respuesta a la declaración presentada por Turquía con ocasión de su firma del Protocolo Adicional al Acuerdo de Ankara el 29 de julio de 2005, que incluye una disposición según la cual el reconocimiento de todos los Estados miembros es un elemento esencial de las negociaciones, y la necesidad de que Turquía proceda a la normalización de sus relaciones con todos los Estados miembros y aplique íntegramente el Protocolo adicional del Acuerdo de Ankara en lo que respecta a todos los Estados miembros, eliminando todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones relativas a los medios de transporte, sin prejuicios ni discriminaciones,
- Vistas las Declaraciones UE-Turquía de 18 de marzo de 2016 y 29 de noviembre de 2015,
- Visto el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Turquía sobre readmisión de

¹ DO L 330 de 20.9.2021, p. 1.

residentes ilegales¹ (Acuerdo de readmisión UE-Turquía),

- Vistos las Conclusiones del Consejo de 26 de junio de 2018, 18 de junio de 2019 y 14 de diciembre de 2021 sobre la ampliación y el proceso de estabilización y asociación, las Conclusiones del Consejo de 15 de julio y 14 de octubre de 2019 sobre las actividades ilegales de perforación por parte de Turquía en el Mediterráneo oriental, las Conclusiones del Consejo Europeo de 12 de diciembre de 2019, de los días 1 y 2 y 15 y 16 de octubre de 2020 y del 24 de junio de 2021, todas las demás Conclusiones pertinentes del Consejo y del Consejo Europeo, la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión de 15 de mayo de 2020 y los principales resultados de su videoconferencia de 14 de agosto de 2020 sobre la situación en el Mediterráneo oriental, los resultados de la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión (Gymnich) de los días 27 y 28 de agosto de 2020, y la Declaración de los miembros del Consejo Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre el Mediterráneo oriental,
- Vista la Decisión (PESC) 2019/1894 del Consejo, de 11 de noviembre de 2019, relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de las actividades de perforación no autorizadas de Turquía en el Mediterráneo oriental², prorrogada por la Decisión (PESC) 2020/1657 del Consejo de 6 de noviembre de 2020³ y la Decisión (PESC) 2021/1966 del Consejo de 11 de noviembre de 2021⁴,
- Vista la pertenencia de Turquía al Consejo de Europa y la OTAN,
- Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de mayo de 2021, titulada «Quinto informe anual sobre el Mecanismo para los refugiados en Turquía» (COM(2021)0255),
- Vistas las cartas del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa de 25 de febrero de 2021, sobre la restricción de las actividades de las ONG y la libertad de asociación en nombre de la lucha contra el terrorismo, y de 17 de junio de 2021, sobre los derechos humanos de las personas LGBTI,
- Vistas las Resoluciones pertinentes del Comité de Ministros del Consejo de Europa, incluidas las Resoluciones provisionales de 2 de febrero de 2022 y de 2 de diciembre de 2021, sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Kavala contra Turquía, de 2 de diciembre de 2021, sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Selahattin Demirtaş contra Turquía (n.º 2), y de 16 de septiembre de 2021, sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Chipre contra Turquía, así como la Resolución de 17 de octubre de 2007, la Resolución provisional de 9 de marzo de 2009 y las sucesivas nueve decisiones sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Ülke contra Turquía,
- Vistos el artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que las partes contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en los litigios en que sean partes, y la

¹ DO L 134 de 7.5.2014, p. 3.

² DO L 291 de 12.11.2019, p. 47.

³ DO L 372 I de 9.11.2020, p. 16.

⁴ DO L 400 de 12.11.2021, p. 157.

consecuente obligación de Turquía de ejecutar todas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

- Vistas las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Chipre, incluidas las Resoluciones 186(1964), de 4 de marzo de 1964, que reafirma la soberanía de la República de Chipre, 550(1984), de 11 de mayo de 1984, sobre las medidas secesionistas en Chipre, y 789(1992), de 25 de noviembre de 1992, en la que se insta a todas las partes interesadas en la cuestión chipriota a que se obliguen a las medidas de fomento de la confianza establecidas en la Resolución, en las que se considera que los intentos de poblar cualquier parte de Varosha con personas distintas de sus habitantes son inadmisibles y se pide que esta zona se transfiera a la administración de las Naciones Unidas,
- Vista la Ley n.º 7262, de diciembre de 2020, sobre la prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que instrumentaliza las medidas de lucha contra el terrorismo para atacar a la sociedad civil,
- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 6 de enero de 2021, sobre las restricciones impuestas a las actividades de las ONG en Estados miembros del Consejo de Europa,
- Vista la declaración de la Unesco, de 10 de julio de 2020 sobre Santa Sofía, Estambul,
- Vistos la Clasificación Mundial de la Libertad de la Prensa de 2022, publicada por Reporteros sin Fronteras, que sitúa a Turquía en el puesto 149 de un total de 180 países, el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional y el Informe Mundial 2022 de Human Rights Watch,
- Vistas sus anteriores Resoluciones, en particular las Resoluciones de 19 de mayo de 2021, sobre los informes 2019-2020 de la Comisión sobre Turquía¹, de 8 de julio de 2021, sobre la represión de la oposición en Turquía, en particular del Partido Democrático de los Pueblos (HDP)², de 21 de enero de 2021, sobre la situación de los derechos humanos en Turquía, en particular el caso de Selahattin Demirtaş y otros presos de conciencia³, de 26 de noviembre de 2020, sobre la escalada de tensiones en Varosha tras las acciones ilegales de Turquía y la necesidad urgente de reanudar las conversaciones⁴, de 15 de abril de 2015, sobre el centenario del genocidio armenio⁵, de 7 de octubre de 2021, sobre el informe de ejecución sobre los fondos fiduciarios de la UE y el Mecanismo para los refugiados en Turquía⁶, y de 24 de noviembre de 2021, sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/2021 de la Unión Europea para el ejercicio 2021 – Ayuda humanitaria a los refugiados en Turquía⁷,

¹ DO C 15 de 12.1.2022, p. 81.

² DO C 99 de 1.3.2022, p. 209.

³ DO C 456 de 10.11.2021, p. 247.

⁴ DO C 425 de 20.10.2021, p. 143.

⁵ DO C 328 de 6.9.2016, p. 2.

⁶ DO C 132 de 24.3.2022, p. 88.

⁷ Textos Aprobados, P9_TA(2021)0466.

- Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,
 - Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0149/2022),
- A. Considerando que Turquía, como país candidato a la adhesión a la Unión, es un socio clave en relación con la economía y un importante vecino y socio estratégico para la Unión en ámbitos esenciales de interés común, como el comercio, la migración, la salud pública, el clima, la transición ecológica, la seguridad y la lucha contra el terrorismo;
- B. Considerando que, en 2020, la integración económica de Turquía con la Unión siguió siendo considerable y que el país se posicionó como el sexto mayor socio comercial de la Unión, mientras que la Unión sigue siendo, con diferencia, el mayor socio comercial de Turquía y su mayor fuente de inversión extranjera directa; que Turquía está atravesando actualmente dificultades económicas y financieras que están agravando el impacto económico de la pandemia; que Turquía ha mostrado reticencia y ha establecido condiciones políticas para admitir a Finlandia y Suecia en la OTAN; que es importante que, en las graves circunstancias actuales, todos los aliados de la OTAN actúen con previsión y ratifiquen rápidamente los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia;
- C. Considerando que recientemente el trabajo sobre la dimensión de seguridad de la Unión ha estado avanzado, adquiriendo estructura y sustancia, y que Turquía representa un socio sumamente valioso como aliado de la OTAN y socio estratégico que ocupa un lugar clave en Europa y desempeña un papel geoestratégico fundamental en la arquitectura de seguridad del mar Negro y, en particular, en la seguridad de Ucrania, que se enfrenta a la agresión rusa;
- D. Considerando que Turquía acoge a la mayor población de refugiados del mundo, con casi cuatro millones de refugiados registrados procedentes de Siria, Irak y Afganistán, y que la financiación de la Unión a estas comunidades ha demostrado su eficacia a la hora de ayudar a Turquía a responder rápidamente a las necesidades humanitarias y de desarrollo de los refugiados y de sus comunidades de acogida;
- E. Considerando que, a raíz de las medidas adoptadas para reducir la escalada de las tensiones entre la Unión y Turquía, así como entre Turquía y algunos Estados miembros de la Unión en el Mediterráneo oriental, el Consejo Europeo se ha ofrecido a fomentar una dinámica más positiva en las relaciones entre la Unión y Turquía, siempre que se sigan desplegando los correspondientes esfuerzos constructivos; que, en particular, el Consejo Europeo ha expresado su disposición a colaborar con Turquía de manera gradual, proporcionada y reversible en una serie de ámbitos de interés común, siempre que sigan disminuyendo las recientes tensiones entre la Unión y Turquía, en particular en relación con la situación en el Mediterráneo oriental, y que Turquía se implique de manera constructiva y cumpla las condiciones establecidas en anteriores Conclusiones del Consejo Europeo, en particular las relaciones de buena vecindad y el respeto de los derechos humanos y del Derecho internacional;
- F. Considerando que el hecho de ser país candidato a la adhesión presupone una voluntad de aproximación y adaptación progresiva desde todos los puntos de vista al acervo de la Unión, incluidos los valores, los intereses, las normas y las políticas, de respeto y cumplimiento de los criterios de Copenhague, de armonización con las políticas y objetivos de la Unión, y de desarrollo y mantenimiento de relaciones de buena vecindad

con la Unión y todos sus Estados miembros sin discriminación; que un análisis de los informes de la Unión de los últimos años pone de manifiesto que Turquía sigue muy alejada de los valores y el marco normativo de la Unión y que esta brecha incluso está aumentando en ámbitos fundamentales como el respeto del Derecho internacional, el Estado de Derecho, los derechos humanos, las libertades individuales, los derechos civiles y la libertad de expresión, así como las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional; que los vínculos entre la sociedad civil y las fuerzas prodemocráticas turcas y la Unión siguen siendo fuertes, ya que la Unión está profundamente comprometida a prestar apoyo a las organizaciones y ciudadanos turcos que promueven las normas y los valores europeos;

- G. Considerando que, a lo largo del último año, las relaciones entre la Unión y Turquía se han mantenido estables por término medio, ya que la cooperación y el diálogo reforzados sobre una serie de cuestiones han coexistido con conflictos y tensiones regulares; que la presente Resolución refleja esta situación acogiendo con satisfacción los avances positivos y señalando un mayor potencial en la relación, al mismo tiempo que indica los problemas pendientes, en particular en lo que se refiere al Estado de Derecho y los derechos fundamentales en violación de los criterios de Copenhague, las violaciones del Derecho internacional o las actuales provocaciones contra la República de Chipre; que, si el objetivo de la Resolución es evaluar adecuadamente los progresos o la falta de progresos de Turquía en materia de derechos humanos y Estado de Derecho, como núcleo del proceso de adhesión, es importante describir los mecanismos concretos de erosión de las libertades que, considerados en su conjunto, conducen a este retroceso general con respecto a las normas europeas; que este enfoque supone ir más allá de la simple elaboración de una larga lista de ciudadanos y grupos que sufren como consecuencia de estas decisiones para identificar a los agentes y organismos de las autoridades públicas responsables de esta preocupante situación en su ámbito de actuación particular; que la crítica debe ser específica en vez de genérica;

Evaluación general y evolución más reciente

1. Reitera su preocupación por la brecha persistente entre Turquía y la Unión en términos de valores y normas y por la continua falta de voluntad política para llevar a cabo las reformas necesarias para abordar, en particular, las graves preocupaciones sobre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales que siguen afectando negativamente el proceso de adhesión, a pesar de las reiteradas declaraciones de Turquía sobre el objetivo de la adhesión a la Unión; destaca que, en los dos últimos años, se ha producido un retroceso constante por lo que respecta a los compromisos de Turquía en relación con el proceso de adhesión; considera que, sin avances claros y significativos en este ámbito, el Parlamento no puede prever la reanudación de las negociaciones de adhesión con Turquía, que se encuentran paralizadas de manera efectiva desde 2018; recuerda que la adhesión es, y seguirá siendo, un proceso basado en los méritos que depende totalmente de los progresos objetivos realizados por cada país;
2. Observa que, pese a que se ha producido una ligera mejora en las relaciones entre la Unión y Turquía en el último año y, especialmente, en los últimos meses, ya que el Gobierno de Turquía ha adoptado una actitud más cooperativa, la cooperación y el diálogo reforzados sobre una serie de cuestiones ha coexistido con conflictos regulares y las relaciones han seguido siendo problemáticas con varios Estados miembros de la Unión vecinos, en particular Grecia y la República de Chipre; expresa su esperanza de que estas dificultades actuales puedan superarse y sustituirse por una dinámica positiva

más sostenida y genuina; acoge positivamente el diálogo de alto nivel sobre el cambio climático mantenido entre la Unión y Turquía el 16 de septiembre de 2021 y el hecho de que Turquía haya formulado su propio pacto verde, implantado ambiciosas políticas nacionales sobre el clima y ratificado el Acuerdo de París el 6 de octubre de 2021; acoge favorablemente el diálogo de alto nivel sobre migración y seguridad del 12 de octubre de 2021, que se centró en el fortalecimiento de la cooperación en materia de gestión de la migración, la lucha contra la trata de seres humanos y la delincuencia organizada y la prevención de ataques terroristas; acoge positivamente el diálogo de alto nivel del 1 de diciembre de 2021, cuyos debates se centraron en una cooperación reforzada en materia de amenazas transfronterizas para la salud, por ejemplo a corto plazo en la lucha contra la pandemia de COVID-19; celebra, en ese contexto, el reconocimiento mutuo de los certificados COVID-19 en agosto de 2021;

3. Toma nota de que, si bien las conversaciones de adhesión están en punto muerto, Turquía ha actualizado su plan de acción nacional para la adhesión a la Unión a fin de cubrir el período 2021-2023; toma nota asimismo de los progresos realizados por Turquía para adaptarse en mayor medida al acervo de la Unión en ámbitos como la legislación sobre competencia, su sistema nacional de cualificaciones y el Espacio Europeo de Investigación, así como de los mejores resultados obtenidos por Turquía en consecuencia en el marco de Horizonte 2020;
4. Reitera su firme convicción de que Turquía es un país de importancia estratégica en términos políticos, económicos y de política exterior, un socio clave para la estabilidad de la región en su conjunto, y un aliado crucial, también en el seno de la OTAN, con el que la Unión desea restablecer unas relaciones basadas en el diálogo, el respeto y la confianza mutua; acoge con satisfacción, en este sentido, las recientes declaraciones formuladas al más alto nivel por las autoridades turcas sobre el compromiso del Gobierno turco con la senda hacia la Unión, pero insta a las autoridades turcas a que pongan en práctica sus palabras y demuestren este compromiso con hechos y decisiones específicos; estima que, si las condiciones lo permiten, se debe reforzar aún más el diálogo con las autoridades y los homólogos turcos a todos los niveles, como un medio de contribuir al restablecimiento de la confianza y de reducir las posibilidades de futuras confrontaciones, en consonancia con la posición del Consejo Europeo de asumir un compromiso con Turquía de una manera gradual, proporcional y reversible; pide a ese respecto al Consejo que restablezca el diálogo político de alto nivel suspendido, los diálogos sectoriales de alto nivel sobre economía, energía y transporte, así como el Consejo de Asociación UE-Turquía, vinculados a mejoras en la situación de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho;
5. Expresa su profunda preocupación por la actual situación económica en Turquía, que, debido a la devaluación monetaria, al aumento significativo de la inflación y al incremento constante del coste de la vida, está provocando dificultades para cada vez más personas y empujándolas a la pobreza; observa que, si bien la situación actual se ha venido gestando a lo largo de una serie de años, en diciembre de 2021 se tradujo en una crisis cambiaria, lo que exacerba los efectos relacionados con la pandemia que se registran en la economía; expresa su preocupación por las intervenciones del presidente y la subsiguiente falta de confianza en organismos supuestamente independientes, como el Banco Central y el Instituto Turco de Estadística (TÜİK); señala, a ese respecto, que la independencia operativa de ambas instituciones es un criterio clave para la adhesión a la Unión; subraya, además, que los deficientes resultados de Turquía en materia de respeto del Estado de Derecho también afectan duramente a la reputación del país y que

la falta de seguridad jurídica podría afectar seriamente a la capacidad del país para atraer inversiones extranjeras; estima que una relación más fuerte y estrecha con la Unión contribuiría a reducir parte de las dificultades y ayudaría a mejorar el nivel de vida de la población turca;

6. Señala que, en octubre de 2021, el Grupo de Acción Financiera Internacional añadió a Turquía a la lista de jurisdicciones consideradas incapaces de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de la proliferación; expresa su esperanza de que Turquía pueda demostrar rápidamente que ha realizado los progresos necesarios en la mejora de la aplicación de las medidas pertinentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT);
7. Manifiesta su voluntad de reforzar e intensificar el conocimiento y la comprensión mutuos entre las sociedades de Turquía y de los Estados miembros fomentando el crecimiento cultural y los intercambios socioculturales y luchando contra todas las manifestaciones de prejuicios de índole social, religiosa, étnica o cultural; expresa su pleno compromiso de seguir apoyando a la sociedad civil independiente de Turquía sean cuales sean las circunstancias y el marco de relaciones que exista en el futuro;

Estado de Derecho y derechos fundamentales

8. Lamenta el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Turquía, incluido el retroceso en las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho; considera que la actual forma represiva de gobierno, cuyos pilares principales son el abuso del marco jurídico –particularmente recurriendo a acusaciones de terrorismo y restringiendo la libertad de expresión–, y la falta de independencia del poder judicial, constituye una política gubernamental deliberada, incesante y sistemática desarrollada para suprimir cualquier actividad crítica, ya sea directamente o a través de un efecto disuasorio; manifiesta su consternación por el hecho de que, para llevar a cabo esta política, las autoridades estatales turcas estén dispuestas a ignorar de forma flagrante y persistente sus obligaciones jurídicas internacionales y nacionales, como las derivadas de la pertenencia de Turquía al Consejo de Europa;
9. Insiste en que los derechos y las libertades fundamentales, un ámbito esencial que constituye el núcleo del proceso de adhesión, no pueden desvincularse ni aislarse de las relaciones en términos generales con la Unión y subraya que, para el Parlamento, sigue suponiendo un grave obstáculo para seguir avanzando en relación con un programa positivo que pueda ofrecerse a Turquía, que también debe depender del pleno respeto del Derecho internacional y el principio fundamental de buena vecindad y cooperación regional;
10. Pide a Turquía que aplique plenamente todas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de conformidad con el artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, una obligación incondicional que se deriva de la pertenencia de Turquía al Consejo de Europa y está consagrada en su Constitución; condena con la máxima firmeza la reciente sentencia del Tribunal Penal para Delitos Graves n.º 13 de Estambul por la que se impone una pena de cadena perpetua agravada a Osman Kavala tras más de cuatro años y medio de detención injusta, ilegal e ilegítima; considera que Kavala ha sido condenado por cargos injustificados, con el fin de silenciar y disuadir a las voces críticas en Turquía; reitera su llamamiento a las autoridades turcas para que actúen de conformidad con sus obligaciones internacionales y nacionales, y cumplan la

sentencia definitiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este asunto y liberen inmediatamente a Kavala; condena y deplora los continuos esfuerzos e intentos de prolongar el encarcelamiento de Kavala a través de una serie de complejas tácticas judiciales evasivas, entre ellas la fusión y la división de los expedientes y las constantes irregularidades; manifiesta su consternación por que la pena de cadena perpetua agravada fuera impuesta por el Tribunal en virtud del artículo 312 del Código Penal turco (intento de derrocamiento del Gobierno por la fuerza y la violencia), a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó específicamente esta acusación en sus sentencias; toma nota de las decisiones reiteradas del Comité de Ministros del Consejo de Europa en las que se insta a liberar a Kavala y que culminaron en la incoación histórica de procedimientos de infracción contra Turquía a través de resoluciones provisionales, en diciembre de 2021 y febrero de 2022, sobre la negativa del país a acatar la sentencia definitiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; observa que los procedimientos de infracción ponen de manifiesto la gravedad de las violaciones por parte de Turquía de sus obligaciones como miembro del Consejo de Europa y país candidato a la adhesión a la Unión;

11. Reitera su firme condena y su pesar por la retirada de Turquía del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) por decreto presidencial, una decisión particularmente alarmante dado el creciente número de feminicidios y otras formas de violencia en el país, que constituye un revés de primer orden respecto de los esfuerzos para promover los derechos de las mujeres en el país; reitera su llamamiento al Gobierno de Turquía para que revoque esta decisión incomprensible, que constituye una flagrante violación de los valores europeos fundamentales y formará parte de la evaluación del proceso de adhesión de Turquía; pide a las autoridades turcas, a este respecto, que apliquen una política de tolerancia cero, que prevengan y combatan la violencia contra todas las mujeres y niñas, que ayuden a las supervivientes y que hagan que los maltratadores rindan cuentas aplicando plenamente, mientras tanto, la Ley turca n.º 6284 sobre la protección de la familia y la prevención de la violencia contra las mujeres y todas las medidas identificadas en la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; expresa su profunda preocupación por el escrito de acusación presentado por la Oficina de Delitos Intelectuales e Industriales de la Fiscalía General de Estambul, que busca el cierre de la plataforma Paremos los Asesinatos de Mujeres (KCDP), uno de los mayores y más destacados grupos de defensa de los derechos de las mujeres en Turquía que lucha contra la violencia de género, y en el que se la acusa de violar la moralidad pública;
12. Señala la importancia de defender la libertad de reunión y manifestación en Turquía, que está consagrada en su Constitución y constituye una obligación positiva derivada de su condición de parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos; lamenta el grave retroceso de la libertad de reunión y de manifestación, que se encuentra bajo cada vez más presión a la luz del uso rutinario y la ampliación de las prohibiciones de protestas y manifestaciones por parte de los gobernadores provinciales, el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y periodistas en un contexto de impunidad general de los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y las multas y enjuiciamientos administrativos impuestos a los manifestantes acusados de actividades relacionadas con el terrorismo; expresa su especial preocupación por la prohibición impuesta por el gobernador de la provincia de Van, que lleva más de cinco años en vigor en este territorio; lamenta la persecución de los periodistas en las protestas públicas por parte de las fuerzas policiales turcas, también mediante la directiva de abril de 2021 del jefe de la

Dirección General de Seguridad de Turquía, en la que se encarga a las fuerzas policiales turcas que impidan las grabaciones de protestas y manifestaciones por parte de la prensa y que fue posteriormente suspendida por el Consejo de Estado; reitera su llamamiento a las autoridades para que retiren los cargos contra los estudiantes de la Universidad Boğaziçi acusados de ejercer su derecho de reunión pacífica, y pone de relieve la importancia de garantizar la libertad de cátedra y la autonomía de las universidades; expresa su preocupación a ese respecto ante la reciente decisión de destituir a tres decanos elegidos de la Universidad Boğaziçi, cuyo actual rector fue nombrado por decreto presidencial en agosto de 2021; acoge con satisfacción la declaración del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de 4 de febrero de 2021, en la que se recuerda que la pandemia de COVID-19 no puede utilizarse como medio para silenciar las voces críticas y se condenan los discursos de odio de funcionarios de alto nivel contra estudiantes LGBTI; condena enérgicamente la violenta represión ejercida recientemente por la policía en el 9.º marcha del orgullo en la Universidad de Boğaziçi, en el que se utilizó una fuerza excesiva ilegal contra los estudiantes y se detuvo a numerosos participantes;

13. Reitera su profunda preocupación por las medidas desproporcionadas y arbitrarias que restringen la libertad de expresión; toma nota de que ha disminuido aún más el número de periodistas encarcelados en Turquía y que ha aumentado el número de absoluciones en los casos contra periodistas, según se ha observado recientemente; exige la liberación y la absolución de todos los periodistas, escritores, empleados de medios de comunicación y usuarios de redes sociales que permanecen detenidos ilegalmente por el mero hecho de ejercer su profesión y sus derechos civiles; acoge con satisfacción las recientes sentencias del Consejo de Estado por las que se suspende la ejecución de algunos artículos de la normativa sobre las autorizaciones de prensa y la circular policial que había prohibido grabaciones audiovisuales en manifestaciones públicas; expresa, entretanto, su profunda preocupación por las continuas detenciones arbitrarias de periodistas, trabajadores de medios de comunicación y usuarios de redes sociales, el uso sistemático de acusaciones de terrorismo formuladas de forma vagos para silenciarlos, las crecientes restricciones y censura impuestas a las plataformas de redes sociales y la práctica de investigar y enjuiciar a personas por no haber respetado supuestamente los valores islámicos; manifiesta su especial consternación por el flagrante uso indebido del artículo 299 del Código Penal turco sobre los insultos al presidente, que puede llevar aparejada una pena de prisión de entre uno y cuatro años; considera totalmente desproporcionado que, desde 2014, primer año de mandato del presidente Erdoğan, se hayan iniciado más de 160 000 investigaciones, se hayan presentado más de 35 500 casos y se hayan impuesto más de 12 800 condenas por insultar al presidente; pide a las autoridades turcas que modifiquen la legislación relativa a los insultos al presidente de conformidad con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que sigan las recomendaciones de la Comisión de Venecia con el fin de adaptar la legislación turca en esta materia al Convenio Europeo de Derechos Humanos; expresa su especial consternación por el caso de la periodista Sedef Kaş, que ha sido condenada recientemente a dos años y cuatro meses de prisión por el Tribunal Penal de Primera Instancia n.º 36 de Estambul por supuestamente «insultar al presidente» en una emisión en directo en el canal de televisión TELE1 el 14 de enero de 2022; lamenta el trato que ha recibido desde que fue detenida en el marco de una operación policial nocturna el 22 de enero de 2022, tras haber sido objetivo público de altos funcionarios del Gobierno y haber pasado 49 días en prisión preventiva, y denuncia el hecho de que en el escrito de acusación preparado por la Fiscalía General de Estambul se pidan hasta

doce años y diez meses de prisión por diferentes delitos; considera que este caso es un claro ejemplo del uso indebido del artículo 299 con el objetivo de disuadir a cualquier periodista o ciudadano de expresar críticas al presidente o al Gobierno; expresa su preocupación por la circular presidencial sobre las actividades de prensa y radiodifusión, publicada el 28 de enero de 2022, ya que podría implicar restricciones ilegales de los derechos y las libertades fundamentales; expresa su preocupación por el hecho de que, de todos los miembros del Consejo de Europa, Turquía tuviera el mayor número de sentencias sobre violaciones de la libertad de expresión en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2021, y lamenta que Turquía siga figurando entre los países en los que más se ataca a la libertad de prensa;

14. Afirma que el enjuiciamiento, la censura y el acoso continuos a periodistas y medios de comunicación independientes sigue siendo motivo de preocupación en Turquía, y que esto debe abordarse sin demora, ya que está deteriorando el tejido democrático de la sociedad turca; manifiesta, además, su preocupación por la persecución de periodistas y opositores en la Unión Europea; pide al presidente del Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) que ponga fin a la imposición excesiva de multas y prohibiciones de radiodifusión que restringen la libertad legítima de expresión de periodistas y organismos de radiodifusión turcos; manifiesta su preocupación por la amenaza del RTÜK de bloquear los medios de comunicación internacionales Deutsche Welle, Euronews y Voice of America si no solicitan licencias de radiodifusión que permitirían la supervisión de sus contenidos; pide a RTÜK que ponga fin a sus medidas punitivas discriminatorias contra los organismos de radiodifusión independientes; lamenta la creciente influencia económica en nombre del Gobierno, incluida la falta de transparencia con respecto a la distribución de fondos públicos (publicidad, licitaciones públicas), lo que permite un control casi total de los medios de comunicación de masas; manifiesta su preocupación por la difusión de propaganda estatal en los medios de comunicación estatales y progubernamentales; pide al presidente de la Agencia de Publicidad en Prensa (BİK) que vele por que la prohibición de la publicidad pública no sirva para eliminar información de los medios de comunicación independientes, como en el caso del periódico *Evrensel*, que representa un punto negativo en la historia de la prensa turca; pide al director de Comunicaciones de la Presidencia turca que garantice la tramitación rápida de las solicitudes de autorizaciones de prensa y que deje de recurrir a las denuncias penales y la retórica beligerante contra periodistas; pide a la Gran Asamblea Nacional de Turquía que realice un seguimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional turco de enero de 2022 en la que se pide la reformulación del artículo 9 de la Ley de Internet para proteger las libertades de expresión y de prensa; expresa su especial preocupación por el caso del periodista turcochipriota Ali Kışmir, que desde hace poco tiene prohibida la entrada en Turquía y se enfrenta a cargos judiciales por haber expresado críticas contra Ankara;
15. Toma nota de la adopción de los paquetes judiciales cuarto y quinto en Turquía durante 2021, que, aunque representan pasos en la dirección correcta, son modestos y no abordan las principales preocupaciones; afirma, no obstante, que los problemas actuales no solo se derivan de una legislación problemática, sino que a menudo se deben a la insuficiencia y la falta de voluntad política para aplicar las disposiciones adecuadas existentes; sigue preocupado por el continuo deterioro del Estado de Derecho y de la independencia e imparcialidad del poder judicial en Turquía, así como por el efecto disuasorio de los despidos masivos llevados a cabo por el Gobierno en los últimos años y por las declaraciones públicas de ejecutivos sobre los casos judiciales en curso, que menoscaban la independencia y la imparcialidad del poder judicial y su capacidad

general para proporcionar un recurso efectivo contra las violaciones de los derechos humanos; observa con pesar, en este contexto, que las reformas judiciales no abordan estas deficiencias fundamentales; subraya que este es un ámbito de máxima preocupación, ya que representa la piedra angular de un sistema democrático operativo que sirva y beneficie a la población; toma nota del nombramiento como miembro del Tribunal Constitucional turco, en enero de 2021, de un juez que había trabajado solo veinte días en el Tribunal de Casación y que fungió anteriormente como fiscal jefe de Estambul, cargo que ocupaba cuando participó en los polémicos casos presentados contra Osman Kavala, los manifestantes del parque Gezi y los periodistas Can Dündar y Erdem Gül, entre otros; señala que el Consejo de Jueces y Fiscales (HSK) es el principal elemento de preocupación en relación con la falta de independencia judicial; reitera su petición para que se subsanen las deficiencias en la estructura y el proceso de selección de los miembros de este Consejo con el fin de garantizar su independencia y poner fin a sus decisiones arbitrarias; condena enérgicamente los despidos y las destituciones forzosas de un gran número de jueces y fiscales turcos; recuerda que todo despido y nombramiento en el poder judicial debe estar sujeto a un control especialmente riguroso, que el poder ejecutivo tiene prohibido interferir o intentar influir en el poder judicial y que el nombramiento de la judicatura debe respetar los principios de independencia e imparcialidad; manifiesta su consternación por las informaciones sobre un patrón de persecución de abogados que representan a personas acusadas de terrorismo, conforme al cual los abogados fueron encausados por el mismo delito atribuido a su cliente o un delito relacionado, en un contexto en el que esto constituía un claro obstáculo para el disfrute del derecho a un juicio justo y el acceso a la justicia; insta al Gobierno turco a que garantice el trabajo independiente de los abogados y libere a cualquier persona detenida ilegalmente por el mero desempeño de sus funciones legales; observa con profunda preocupación que, a pesar del levantamiento oficial del estado de excepción en julio de 2018, sus repercusiones en la democracia y los derechos fundamentales siguen siendo importantes y siguen afectando a muchas personas entre los más de 152 000 funcionarios públicos, incluidos profesores, médicos, académicos (por la paz), abogados, jueces y fiscales, que fueron despedidos de forma arbitraria y a los que se prohibió permanentemente trabajar en el sector público o incluso en el conjunto de su profesión; destaca que muchos de estos despidos siguen teniendo efectos devastadores en las personas despedidas y sus familias, entre ellos un estigma social y profesional duradero; alberga serias dudas respecto al funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre las Medidas del Estado de Excepción como mecanismo interno de recurso, debido a su falta de independencia e imparcialidad; observa que las anulaciones arbitrarias de pasaportes, a pesar de algunas mejoras graduales, siguen constituyendo una importante vulneración de la libre circulación;

16. Expresa su preocupación por el número cada vez mayor de recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional en relación con violaciones de los derechos constitucionales y por la falta de cambios realizados cuando salen a la luz tales violaciones; toma nota de las recientes declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, en las que reconoce que más del 73 % de los más de 66 000 recursos recibidos en 2021 se referían al derecho a un juicio justo, y califica la situación de «grave»; cuestiona la legalidad de los cambios en las normas procesales del Tribunal que permiten aplazar las decisiones un año;
17. Toma nota de la adopción de un nuevo plan de acción en materia de derechos humanos por parte de las autoridades turcas en marzo de 2021 como algo positivo en principio;

señala, no obstante, que no aborda una serie de cuestiones subyacentes y que el compromiso del Gobierno se medirá en función de la envergadura de la ejecución del plan y de las reformas emprendidas para garantizar su aplicación a todos los ciudadanos sin discriminación; insta a las autoridades turcas a que redoblen sus esfuerzos para abordar eficazmente la grave situación de los kurdos, los armenios, los asirios y, en particular, los aspectos relativos a la vivienda y la educación de la comunidad romaní, que siguen teniendo que hacer frente a niveles comparativamente más elevados de pobreza, desempleo, discriminación y exclusión;

18. Pide la plena aplicación de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de las resoluciones provisionales del Comité de Ministros del Consejo de Europa relativas a la objeción de conciencia; toma nota, a este respecto, del plan de acción presentado por las autoridades turcas al Comité de Ministros y las anima a desarrollar nuevas medidas para garantizar, mediante la legislación necesaria, un ejercicio justo y accesible del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar; expresa su preocupación por el creciente número de solicitudes relativas a la objeción de conciencia ante el Tribunal Constitucional, desde la primera solicitud en 2017, que siguen pendientes sin ninguna comunicación esencial con los solicitantes; insta a que se introduzcan las modificaciones jurídicas necesarias para poner fin al ciclo de enjuiciamientos y castigos, así como a todas las restricciones que afectan a los objetores de conciencia;
19. Pide a las autoridades turcas que promuevan reformas positivas y eficaces en el ámbito de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión permitiendo a las comunidades religiosas adquirir personalidad jurídica y derechos educativos y aplicando de las recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre el estatuto de las comunidades religiosas, todas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las Resoluciones del Consejo de Europa pertinentes, incluidas las relativas a la población griega ortodoxa en las islas de Gökçeada (Imbros) y Bozcaada (Tenedos); pide al Gobierno turco que intensifique los esfuerzos actuales relacionados, entre otras cosas, con el reconocimiento público de la identidad aleví y el estatuto jurídico de los cemevis y su financiación, de conformidad con las correspondientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las clases obligatorias de religión y ética, y los lugares de culto alevíes; solicita a las autoridades turcas que respeten plenamente el carácter histórico y cultural de los monumentos y símbolos culturales y religiosos, especialmente de los incluidos en la lista de lugares Patrimonio Mundial de la Unesco; observa con preocupación los recientes acontecimientos en relación con el histórico Monasterio Panagia Soumela, que figura en la lista indicativa del Patrimonio Mundial de la Unesco; destaca la necesidad de eliminar las restricciones relativas a la formación, el nombramiento y la sucesión de los miembros del clero, permitir la reapertura del seminario de Halki, que permanece cerrado desde 1971, y de retirar todos los obstáculos a su correcto funcionamiento; reitera su petición a Turquía de que respete el papel del patriarca ecuménico para los cristianos ortodoxos de todo el mundo, de que reconozca su personalidad jurídica y de que permita el uso público del título eclesiástico del patriarca ecuménico; lamenta que, tras su anulación en 2013, todavía esté pendiente de publicación un nuevo reglamento electoral para fundaciones no musulmanas, lo que ha generado graves problemas para la correcta administración de dichas fundaciones, dado que no se pueden celebrar elecciones; observa con preocupación que se han seguido produciendo casos de incitación al odio y los delitos de odio contra minorías religiosas, principalmente alevíes, cristianos y judíos, y que las investigaciones han seguido siendo ineficaces; insta a las autoridades turcas a que persigan de manera

efectiva a los delincuentes y que protejan adecuadamente a todas las minorías religiosas;

20. Lamenta la presión jurídica y administrativa sostenida que ejerce el Gobierno turco sobre la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los abogados, los periodistas, los académicos, los sindicalistas, las minorías étnicas y religiosas y numerosos ciudadanos turcos, así como la continua reducción del espacio para operar libremente en Turquía; denuncia el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil, como importantes ONG de derechos humanos y medios de comunicación; pide a Turquía que considere a las voces críticas o disidentes, incluidos los defensores de los derechos humanos, los abogados, los académicos y los periodistas, como valiosos contribuyentes al diálogo social y no como fuerzas desestabilizadoras, y que les permitan actuar de conformidad con sus obligaciones y dentro de su ámbito de sus competencias y alcance y ejercer su profesión libremente, a fin de lograr una democracia y una sociedad globalmente más sanas; reitera su petición al Gobierno turco para que revise la Ley para prevenir la financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva, de diciembre de 2020, que otorga al Ministerio del Interior y al presidente de Turquía amplios poderes para restringir las actividades de las ONG, las asociaciones comerciales y los grupos y las asociaciones independientes, y parece estar enfocada a limitar, restringir y controlar aún más a la sociedad civil; manifiesta su preocupación por las observaciones del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que señalan que las organizaciones de derechos humanos fueron las primeras en ser inspeccionadas de conformidad con esta ley; pide a la Unión y a sus Estados miembros que ejerzan una mayor presión sobre el Gobierno turco y que intensifiquen su apoyo a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil independiente de Turquía, también a través de los instrumentos financieros pertinentes; pide a la Comisión que proporcione, a través del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III) y de los programas pertinentes del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global, una financiación suficiente para la sociedad civil, los agentes no estatales y los contactos interpersonales, a fin de dar prioridad a los esfuerzos en favor de la democracia, que deben contribuir a general la voluntad política necesaria para reforzar las relaciones entre la Unión y Turquía; pide a la Comisión que considere la posibilidad de conceder financiación a los Gobiernos locales en relación con proyectos de interés mutuo; destaca que la ayuda financiera en el marco del IAP III se basa en la condicionalidad vinculada al enfoque de «primero lo fundamental» y reitera, en este contexto, su petición de que la financiación del IAP para las reformas en Turquía se desembolse con total transparencia y sea gestionada directamente por la Unión o por una institución internacional reconocida;
21. Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI patrocinado por el Estado, en particular por lo que respecta a los ataques físicos y los delitos de odio, especialmente contra las personas transgénero, las prolongadas prohibiciones de los desfiles del orgullo en todo el país, las restricciones a las libertades de reunión, asociación y expresión, y la censura en los medios de comunicación, e insta al Gobierno turco a que proteja sus derechos iguales y legales; recuerda la necesidad de adoptar medidas para garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de estas libertades de forma segura; pone de relieve la posición cada vez más homófoba del Gobierno de Turquía y el uso de los discursos de odio contra las personas LGBTI por parte de funcionarios de alto nivel, que tiene por objeto estigmatizar y criminalizar a la comunidad LGBTI y puede servir de caldo de

cultivo para los delitos de odio y contribuir en gran medida al aumento del acoso, la discriminación y la violencia potencial; recuerda que las obligaciones de Turquía en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos implican la responsabilidad de combatir la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI, e insta a las autoridades a cumplir sus compromisos; pide que la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales se añadan como motivos protegidos en la disposición relativa a la no discriminación de la legislación laboral; destaca la tendencia a utilizar los procedimientos judiciales para silenciar a los defensores de los derechos humanos, las ONG y los abogados, y para restringir el activismo, en particular el de los defensores de los derechos de las personas LGBTI; manifiesta su preocupación por las investigaciones penales contra los colegios de abogados de Estambul, Ankara y Diyarbakır, y por el caso de los participantes en la marcha del orgullo en la Universidad Técnica de Oriente Medio en Ankara de 2019; acoge con satisfacción la absolución de estos últimos; sigue con gran preocupación el juicio que se está celebrando contra el comité ejecutivo y el presidente del Colegio de Abogados de Ankara, en el que la Fiscalía General de Ankara solicita hasta dos años de prisión por supuestamente «insultar a un funcionario público» al criticar al jefe de la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet) por las declaraciones abiertamente homófobas que hizo el 14 de abril de 2020, en las que afirmaba que «el Islam maldice la homosexualidad (...) porque provoca enfermedades y echa a perder generaciones»; insta a las autoridades turcas a que adopten las medidas jurídicas necesarias para poner fin a toda discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, de conformidad con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; pide a las autoridades que adapten su legislación penal relativa a los delitos de odio homófobos y transfóbicos a la Recomendación n.º 7 de política general de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia; insta a Turquía a que retire todos los cargos contra los participantes pacíficos en actos LGBTI y a que suprima las prolongadas prohibiciones de los actos del orgullo;

22. Expresa su profunda preocupación por los constantes ataques y presiones contra los partidos de la oposición, en particular el HDP y otros partidos, incluido el Partido Popular Republicano (CHP), por ejemplo, presionarlos, obligarles a cerrar o encarcelar a sus miembros, lo que socava el buen funcionamiento del sistema democrático; subraya que la democracia presupone un entorno en el que los partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación puedan desarrollar su actividad sin amenazas ni restricciones arbitrarias;
23. Observa con gran preocupación que el HDP, sus alcaldes electos y sus organizaciones del partido, incluida su organización juvenil, han sido objetivo continuo de las autoridades turcas y han sido acusados de delitos de manera específica y permanente por estas autoridades, lo que ha conducido a que más de 4 000 miembros del HDP se encuentren actualmente en prisión; sigue condenando enérgicamente que Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, antiguos copresidentes del HDP, sigan encarcelados desde noviembre de 2016 y pide su inmediata liberación; manifiesta su consternación por que las autoridades turcas ignoren continuamente y no apliquen las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obligan a Turquía a liberar inmediatamente a Selahattin Demirtaş; condena enérgicamente el auto de acusación en el que se solicitaba la disolución del partido HDP y la inhabilitación política de 451 personas, incluida la mayoría de los dirigentes actuales del HDP, presentado por el fiscal jefe del Tribunal de Casación de Turquía y aceptada por unanimidad por el Tribunal Constitucional de Turquía en junio de 2021, y que les impide llevar a cabo

cualquier tipo de actividad política en los próximos cinco años; recuerda que el Tribunal Constitucional inhabilitó anteriormente seis partidos políticos prokurdos; observa con gran preocupación que el asunto de disolución del HDP es la culminación de una represión contra el partido que se lleva produciendo desde hace varios años, y reitera que la prohibición del partido constituiría un grave error político al asestar un golpe irreversible al pluralismo y los principios democráticos; destaca, asimismo, el papel del Tribunal Penal para Delitos Graves n.º 22 de Ankara en el denominado «caso Kobane» contra 108 personas, incluidos numerosos políticos del HDP; señala el papel especial del fiscal y pide claridad aclaraciones, en especial, sobre la supuesta injerencia política documentada en el expediente; se pregunta, asimismo, acerca de la forma en que el Tribunal pudo examinar y aceptar un documento de 3 530 páginas en una semana, sin oír a los querellados;

24. Manifiesta su preocupación por el enjuiciamiento en curso de la vicepresidenta del CHP, Gökçe Gökçen, en el marco de una investigación contra todo el comité ejecutivo del partido por la publicación y distribución de un folleto; expresa su consternación por que, de las tres querellas presentadas contra ella, la Fiscalía General de Ankara imputara a Gökçen el delito de agresión física al presidente, que conlleva una pena de prisión mínima de cinco años, en relación con la publicación de dicho folleto; observa que, si bien el Tribunal Supremo de lo Penal n.º 18 de Ankara desestimó esta querella, las otras dos querellas por calumnia, incitación al odio y difamación contra el presidente siguen en curso; sigue profundamente preocupado por el continuo acoso político y judicial que sufre Canan Kaftancıoğlu, presidenta del CHP en la provincia de Estambul, por el creciente número de querellas presentadas contra ella; condena la reciente decisión del Tribunal de Casación de confirmar tres de las cinco sentencias dictadas contra ella por las que se imponen cuatro años y once meses de prisión y la inhabilitación política de Kaftancıoğlu; manifiesta su preocupación por la arbitrariedad del proceso de registro del Partido Verde de Turquía, que solicitó un certificado de la constitución del partido al Ministerio del Interior turco en el día de su creación en septiembre de 2020, pero hasta la fecha no se le ha expedido dicho certificado;
25. Condena, asimismo, el uso recurrente a la revocación del estatuto parlamentario de diputados de la oposición, que perjudica seriamente la imagen del Parlamento turco como institución democrática; recuerda, a este respecto, la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 1 de febrero de 2022, que dictaminó que la suspensión en 2016 de las inmunidades de cuarenta diputados del HDP vulneraba su derecho a la libertad de expresión y reunión; sigue con preocupación el asunto de la diputada del HDP por Diyarbakır, Semra Güzel, acusada de supuesta «pertenencia a una organización terrorista» en relación con imágenes tomadas hace cinco años y cuya inmunidad parlamentaria fue suspendida el 1 de marzo de 2022;
26. Reitera su condena de la decisión adoptada por las autoridades turcas de destituir de sus cargos a más de 150 alcaldes elegidos democráticamente sobre la base de pruebas cuestionables y de sustituirlos de manera arbitraria por administradores designados por el Gobierno central; condena que, tan solo desde las últimas elecciones municipales del 31 de marzo de 2019, 48 de los 65 alcaldes del HDP elegidos democráticamente en el sudeste de Turquía fueran destituidos por el Gobierno y muchos fueran sustituidos por administradores; cree firmemente que estas decisiones ilegales socavan la democracia en el nivel local y constituyen un ataque directo a los principios más básicos de la democracia, que priva a millones de votantes de su representación democráticamente elegida; pide a Turquía que devuelva a los alcaldes destituidos a su cargo; crítica

enérgicamente las medidas políticas, legislativas y administrativas adoptadas por el Gobierno turco con el fin de paralizar los municipios gobernados por alcaldes pertenecientes a partidos de la oposición en Estambul, Ankara y Esmirna;

27. Toma nota de las reformas electorales recientes adoptadas sin consenso entre partidos y de la reducción del umbral electoral del 10 % al 7 %, que sigue siendo demasiado elevado; observa con preocupación los cambios en el procedimiento de selección de las juntas electorales provinciales encargadas del recuento de votos y de los procedimientos de recurso, previamente compuestas por los jueces de mayor rango y que ahora se seleccionarán por sorteo; reitera su llamamiento a Turquía para que mejore a todos los niveles el clima general para las elecciones en el país, garantizando unas condiciones equitativas y justas para todos los candidatos y partidos y alineándose con las recomendaciones de la Comisión de Venecia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa;
28. Reconoce que Turquía tiene preocupaciones legítimas en materia de seguridad y el derecho a luchar contra el terrorismo; hace hincapié, no obstante, en que ello debe hacerse desde el pleno respeto del Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales; reitera su firme condena inequívoca de los ataques terroristas violentos por parte del Partido de los Trabajadores del Kurdistan (PKK), que está incluido desde 2002 en la lista de la Unión de organizaciones terroristas; señala la importancia que reviste para Turquía, la Unión y sus Estados miembros cooperar estrechamente en la lucha contra el terrorismo, incluido el Dáesh; alienta a las autoridades turcas a seguir trabajando para desarrollar una estrecha cooperación con la Unión en la lucha contra el terrorismo, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y para adaptar su legislación sobre el terrorismo y las prácticas correspondientes a las normas europeas; toma nota de las negociaciones en curso sobre un acuerdo internacional de intercambio de datos personales entre Europol y las autoridades turcas competentes en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo; expresa su esperanza de que estas negociaciones respeten las normas europeas en materia de protección de datos y de derechos fundamentales; pide a Turquía, una vez más, que armonice su legislación en materia de protección de datos con las normas europeas para posibilitar la cooperación con Europol y mejorar así el corpus normativo relativo a la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la ciberdelincuencia;
29. Subraya que las disposiciones antiterroristas en Turquía siguen siendo demasiado difusas y se utilizan de manera discrecional para vulnerar los derechos humanos y reprimir cualquier voz crítica del país, incluidos periodistas, activistas y la oposición política, y destaca que, al utilizar indebidamente la legislación antiterrorista, las autoridades rebajan la gravedad de esta amenaza permanente; señala que, en este contexto, siguen produciéndose casos de desapariciones forzadas; expresa su profunda preocupación por la decisión del ministro del Interior de iniciar una investigación especial en el municipio metropolitano de Estambul, que afecta a más de 550 de sus empleados, por supuestos vínculos terroristas, así como por el acoso judicial que sufre de nuevo Öztürk Türkdoğan, destacado abogado de derechos humanos y copresidente de la Asociación de Derechos Humanos (IHD), juzgado por el Tribunal Penal para Delitos Graves n.º 19 de Ankara acusado de «pertenencia a una organización armada ilegal» a raíz del auto de acusación presentado por la Fiscalía General de Ankara, pero que fue finalmente absuelto;

30. Continúa profundamente preocupado por la situación del pueblo kurdo en el país y la situación en el sudeste de Turquía en lo que respecta a la protección de los derechos humanos, la libertad de expresión y la participación política; muestra su especial preocupación por las múltiples denuncias de torturas y malos tratos ejercidos por agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad contra detenidos al responder a amenazas a la seguridad percibidas y supuestas en el sudeste de Turquía; condena las medidas de detención preventiva aplicadas contra destacados agentes de la sociedad civil y oponentes políticos en el sudeste de Turquía, y pide a Turquía que garantice la protección y la seguridad de los defensores de los derechos humanos y que inicie sin demora investigaciones independientes sobre estas cuestiones; condena la opresión de las minorías étnicas y religiosas, incluida la prohibición por la Constitución turca de la lengua de grupos como la comunidad kurda como «lengua materna» en la educación y en todos los ámbitos de la vida pública; reitera que ello constituye una violación del Derecho internacional, que protege el derecho de las personas a afirmar su pertenencia a una minoría étnica o religiosa y a expresarse en la lengua tradicional de la minoría; destaca la urgencia de reanudar un proceso político creíble que implique a todas las partes pertinentes y las fuerzas democráticas y que conduzca a una solución pacífica de la cuestión kurda;
31. Condena enérgicamente cualquier extradición forzosa, secuestro o sustracción de ciudadanos turcos que residen fuera del país, pues supone una violación de los principios del Estado de Derecho y los derechos humanos básicos; insta a la Unión a que aborde esta preocupante práctica en sus propios Estados miembros y también en los países candidatos y asociados; manifiesta su preocupación por los intentos del Gobierno turco de influir en los miembros de la diáspora turca en la Unión, en particular a través de la Presidencia de Turcos en el Extranjero y Comunidades Relacionadas (YTB) y la Unión Turco-Islámica para Asuntos Religiosos (DITIB), que podrían interferir en los procesos democráticos de algunos Estados miembros; condena, a este respecto, los recientes ataques inaceptables de medios de comunicación progubernamentales turcos contra varios políticos suecos, como el diputado al Parlamento Europeo Evin Incir, que incluyen la desinformación y acusaciones infundadas, entre las que figuran acusaciones de afiliación al terrorismo; reitera su preocupación por que el movimiento racista y de extrema derecha Ülkücü Ocakları, conocido también como los «Lobos Grises», estrechamente vinculado al Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) de la coalición gobernante, se esté extendiendo por la propia Turquía, y también por Estados miembros de la Unión; pide a la Unión y a sus Estados miembros que examinen la posibilidad de prohibir sus asociaciones en los países de la Unión; pide a los Estados miembros que sigan de cerca las actividades racistas de esta organización y respondan para limitar su influencia; pide a las unidades de comunicación estratégica del SEAE que documenten las sospechas de desinformación turca, en especial en África, los Balcanes Occidentales y en la región de Oriente Medio y Norte de África, y que comuniquen al Parlamento Europeo sus conclusiones al respecto; expresa su preocupación por los uigures que viven en Turquía, que siguen en riesgo de ser objeto de detenciones y deportaciones a otros países que, a su vez, podrían entregarlos a China, donde podrían sufrir una grave persecución; pide a las autoridades turcas que no ratifiquen su tratado de extradición con China;
32. Reitera su preocupación por que Turquía se niegue a aplicar las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa; pide a Turquía que se adhiera a una política de tolerancia cero de la tortura y que investigue debidamente las denuncias persistentes y

creíbles de tortura, malos tratos y tratos inhumanos o degradantes durante la detención, el interrogatorio o la prisión preventiva al objeto de poner fin a la impunidad y garantizar la rendición de cuentas de los responsables; acoge con satisfacción la reciente modificación de la normativa relativa a las prisiones para sustituir el término «registro corporal» por «registro pormenorizado», y pide al director de la Dirección General de Prisiones y Centros de Detención que garantice su plena aplicación «respetando la dignidad y el honor humanos», tal como se indica en la normativa modificada, ya que todavía existen acusaciones creíbles sobre la continuación de esta práctica, también en lo que respecta a los menores que visitan prisiones; manifiesta su profunda preocupación por la situación de las saturadas cárceles de Turquía, que agrava el peligro mortal de la pandemia de COVID-19 para los presos; expresa, asimismo, su profunda preocupación por las restricciones arbitrarias impuestas a los derechos de los reclusos en materia de tratamiento médico y visitas; destaca que, según datos de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía (IHD), actualmente hay 1 605 enfermos en las prisiones, de los cuales 604 están gravemente enfermos; lamenta que la exdiputada Aysel Tuğluk siga encarcelada a pesar de su delicado estado de salud, certificado por informes médicos que desestimó posteriormente el Consejo de Medicina Forense (ATK), dirigido por el Estado; pide la liberación inmediata de Aysel Tuğluk; manifiesta su consternación por las denuncias de detenciones de mujeres embarazadas y puerperas, e insta a Turquía a que libere a todas las mujeres en cuestión y a que ponga fin a la práctica de detenerlas justo antes o inmediatamente después de dar a luz; muestra su preocupación por el acoso que sufre el diputado del HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu, a quien recientemente se le impidió viajar al extranjero y que fue sometido a una investigación por parte de la Fiscalía General de Kandira, un proceso que se archivó recientemente, acusado de «insultar al Estado y a sus instituciones», «influir en el experto» y «elogiar el delito y al delincuente» por pedir la liberación de Aysel Tuğluk;

33. Manifiesta su consternación por el silencio del defensor del pueblo turco ante la grave situación de los derechos fundamentales en el país descrita anteriormente; pide al defensor del pueblo de Turquía, que garantice que su institución se convierta en una herramienta útil para los ciudadanos turcos y tenga un papel activo por lo que respecta al refuerzo de la cultura de búsqueda de vías de recurso, tal como ha establecido la institución en sus objetivos; lamenta que ni el defensor del pueblo ni la Institución para los Derechos Humanos y la Igualdad de Turquía, las dos principales instituciones de derechos humanos del país, sean independientes desde el punto de vista operativo, estructural ni financiero; insta a las autoridades turcas a que adopten las medidas adecuadas para que estas instituciones cumplan, cuando proceda, los Principios de París y la Recomendación de la Comisión sobre normas relativas a los organismos para la igualdad¹; lamenta que algunos miembros de la Institución para los Derechos Humanos y la Igualdad demostraran una actitud negativa hacia los derechos humanos básicos, incluida la igualdad de género, los derechos de las mujeres y los derechos de las personas LGBTIQ, y hayan expresado su apoyo a la retirada de Turquía del Convenio de Estambul; pide a la Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos de la Gran Asamblea Nacional de Turquía que ejerza plenamente sus amplias competencias para investigar y exigir responsabilidades en relación con las violaciones de los derechos humanos en el país y que proponga enmiendas legislativas para garantizar que la legislación nacional se adapte a los convenios internacionales en materia de derechos

¹ Recomendación (UE) 2018/951 de la Comisión, de 22 de junio de 2018, sobre normas relativas a los organismos para la igualdad (DO L 167 de 4.7.2018, p. 28).

humanos de los que Turquía es parte;

34. Recuerda que la libertad sindical y el diálogo social son fundamentales para el desarrollo y la prosperidad de una sociedad plural; lamenta, en este contexto, las persistentes deficiencias legislativas en materia de derechos laborales y sindicales, y subraya que el derecho a organizarse, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga constituyen derechos fundamentales de los trabajadores; expresa, asimismo, su preocupación por la persistencia de una fuerte discriminación antisindical en los empleadores y por los despidos, el acoso y el encarcelamiento a los que se sigue sometiendo a los dirigentes y miembros de algunos sindicatos; manifiesta su preocupación también por los despidos sistemáticos de trabajadores que intentan organizarse; pide a las autoridades turcas que se ajusten a las normas básicas de la Organización Internacional del Trabajo con las que se ha comprometido el país, que eliminen los obstáculos que limitan el disfrute de los derechos sindicales y que recurran al diálogo social de manera efectiva, también en cuanto a las medidas de recuperación socioeconómica tras la COVID-19;

Relaciones más amplias entre la Unión y Turquía y política exterior turca

35. Expresa su genuino reconocimiento por el claro apoyo de las autoridades turcas a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como por la condena de la invasión y la agresión militar injustificadas de Rusia contra Ucrania; destaca la importancia vital de una cooperación fuerte entre la Unión y Turquía en materia de política exterior y de seguridad en los tiempos difíciles actuales, y acoge con satisfacción, desde esta perspectiva, el firme alineamiento de Turquía con la OTAN y la Unión; subraya que Turquía es un aliado de la OTAN y un socio estratégico con el que compartimos importantes intereses; elogia la decisión de Turquía de invocar la Convención de Montreux de 1936 y exigir a todos los Estados del mar Negro y de fuera del mar Negro que detengan el paso por sus estrechos; celebra además la ayuda financiera y humanitaria que Turquía brinda actualmente a Ucrania, así como la disposición abierta del Gobierno turco de actuar como mediador entre las partes en conflicto; pide a Turquía que se adhiera a las sanciones y medidas restrictivas adoptadas por la Unión contra las autoridades rusas y bielorrusas responsables de la agresión ilegal contra Ucrania y las muchas violaciones del Derecho internacional que se han producido desde el comienzo de la guerra; destaca, en este sentido, su expectativa de que Turquía, en consonancia con su posición sobre la agresión rusa contra Ucrania, evitará convertirse en un refugio seguro para el capital y las inversiones rusas, lo que claramente eludiría las sanciones de la Unión; anima a Turquía a cerrar su espacio aéreo a las aeronaves rusas;
36. Elogia los esfuerzos realizados por Turquía para seguir acogiendo a la mayor población de refugiados del mundo; celebra, a este respecto, la aportación continua de financiación de la Unión para los refugiados y las comunidades de acogida en Turquía, y expresa su compromiso de mantener este apoyo en el futuro; pide a la Comisión que garantice la máxima transparencia y precisión al asignar los fondos en el marco del instrumento que suceda al Mecanismo de la Unión para los Refugiados en Turquía, y se asegure de que estos fondos se entreguen directamente a los refugiados y a las comunidades de acogida y sean gestionados por organizaciones que garanticen la rendición de cuentas y la transparencia; apoya una evaluación objetiva de la cooperación entre la Unión y Turquía en materia de refugiados y migración y subraya la importancia de que ambas partes cumplan sus respectivos compromisos en virtud de la Declaración conjunta UE-Turquía

de 2016 y el Acuerdo de Readmisión entre la Unión y Turquía respecto de todos los Estados miembros, incluida la reanudación de la readmisión de retornados desde las islas griegas, interrumpida en marzo de 2020, o la activación del régimen voluntario de admisión humanitaria; insiste en que el respeto de las libertades fundamentales debe ocupar un lugar central en el proceso de aplicación de la Declaración UE-Turquía; valora muy positivamente la contribución esencial de la sociedad civil y las autoridades locales turcas a la integración de los refugiados; respalda un acceso mejor y más amplio a los servicios de protección para grupos vulnerables específicos; pide al Gobierno turco que mejore el acceso de los refugiados sirios al mercado laboral y que adopte medidas para evitar el riesgo de apatridia para una generación de niños sirios nacidos en Turquía; reconoce la presión migratoria a la que se enfrenta Turquía, pero se opone firmemente a cualquier instrumentalización de los migrantes por parte del Gobierno turco; manifiesta su preocupación por las continuas informaciones sobre devoluciones forzosas sumarias de afganos y otros detenidos que intentan cruzar la frontera, así como por las deportaciones arbitrarias a Siria; lamenta la trata de seres humanos y las violaciones de los derechos humanos a las que se han visto sometidos los refugiados en Turquía; insiste en que el retorno de los refugiados solo debe tener lugar con carácter voluntario y en condiciones de seguridad, e insta a Turquía a que facilite un mayor acceso a las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales a los centros de deportación para supervisar y prestar asistencia a las personas en proceso de devolución; toma nota con preocupación de los indicios de un aumento de los ataques racistas y xenófobos contra extranjeros, así como del uso de un discurso contra los refugiados y el creciente sentimiento contra la inmigración en la política y la sociedad turcas; observa que en 2021 se registró un aumento continuo de las solicitudes de asilo en Chipre y recuerda la obligación de Turquía de adoptar las medidas necesarias para impedir la apertura de nuevas rutas marítimas o terrestres para la migración ilegal desde Turquía hacia la Unión;

37. Reitera su apoyo a la actual unión aduanera y pide a Turquía que respete sus obligaciones, incluida la eliminación de las barreras no arancelarias a la libre circulación; considera que la consolidación de las relaciones comerciales puede aportar beneficios concretos a los ciudadanos de Turquía y de la Unión; apoya, por tanto, la propuesta de la Comisión de emprender negociaciones sobre la modernización de una unión aduanera que beneficia a ambas partes, acompañada de un mecanismo de solución de controversias eficaz y eficiente; advierte, no obstante, de que dicha modernización de la unión aduanera debería basarse en una condicionalidad estricta relacionada con los derechos humanos y las libertades fundamentales, el respeto del Derecho internacional y las relaciones de buena vecindad, y que solo puede contemplarse una vez que Turquía aplique plenamente el Protocolo adicional para ampliar el Acuerdo de Ankara a todos los Estados miembros sin reservas y de manera no discriminatoria; subraya que ambas partes deben ser plenamente conscientes de esta condicionalidad democrática desde el inicio de las negociaciones, ya que el Parlamento no dará su aprobación al acuerdo final sin resultados en este ámbito;
38. Observa que la liberalización de visados constituiría un importante paso para facilitar los contactos interpersonales y que reviste una gran importancia para los ciudadanos turcos, en particular para los estudiantes, los académicos, los representantes empresariales y las personas con vínculos familiares en los Estados miembros de la Unión; reitera su apoyo al proceso de liberalización de visados una vez que las condiciones establecidas se apliquen plena y efectivamente, y anima al Gobierno turco a que se esfuerce por armonizar su política en materia de visados con la de la Unión y

cumpla plenamente los 72 criterios definidos en la hoja de ruta para la liberalización de visados de manera no discriminatoria con respecto a todos los Estados miembros; destaca que se han registrado muy pocos progresos reales en relación con los seis criterios de referencia pendientes que Turquía todavía debe cumplir; observa que el nuevo plan de acción para los derechos humanos prevé acelerar el cumplimiento de los criterios de referencia restantes; destaca que la revisión de la legislación turca en materia de lucha contra el terrorismo y de protección de datos son condiciones clave para garantizar los derechos y libertades fundamentales;

39. Lamenta la reciente reestructuración de la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación (DG NEAR) de la Comisión por parte del comisario Várhelyi, en la que la unidad responsable de Turquía se ha integrado en las unidades responsables de la vecindad meridional; considera que esta medida, supuestamente adoptada en aras de la eficiencia y la racionalización de la organización interna, constituye un grave error político, que ha sido muy criticada no solo por el Gobierno de Turquía, sino también por todos los actores turcos proeuropeos;
40. Acoge con satisfacción la decisión del Gobierno turco de ratificar el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, su compromiso de alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2053 y su anuncio de adaptarse al Pacto Verde Europeo; considera que la aplicación del Pacto Verde Europeo constituye una importante oportunidad para que la Unión y Turquía armonicen su política comercial y climática, y pide a la Unión que coordine y apoye estrechamente a Turquía en este contexto para lograr medidas ambiciosas de protección del clima; toma nota del papel favorecedor que pueden desempeñar las agencias de la Unión y las alianzas industriales de la Unión en la cooperación UE-Turquía en materia de transformación ecológica; pide a Turquía que siga avanzando en su adaptación a las directivas y al acervo de la Unión en materia de medio ambiente y acción por el clima; pide al Gobierno turco que cumpla con lo anunciado y elabore una estrategia y un plan de acción nacionales para reducir significativamente las emisiones de CO₂; elogia la labor de los defensores de los derechos medioambientales y advierte del grave impacto ambiental de los grandes proyectos de infraestructuras públicas; toma nota de que los trabajos de construcción del canal de Estambul comenzaron en 2021 y llama la atención sobre las advertencias de los ecologistas y de la Cámara de Ingenieros Ambientales de que el canal pondrá en peligro el frágil suministro de agua de Estambul y destruirá el ecosistema circundante, como el equilibrio natural entre el mar Negro y el mar de Mármara; pide a las autoridades turcas que adopten medidas inmediatas para proteger el mar de Mármara y prohíban cualquier proyecto de infraestructura que contribuya a seguir contaminando esta masa de agua; acoge con satisfacción, a este respecto, la decisión del Gobierno turco de conceder al mar de Mármara un estatuto especial de protección ambiental; reitera su llamamiento al Gobierno turco para que suspenda sus planes sobre la central nuclear de Akkuyu y para que consulte a los Gobiernos de los países vecinos en lo que respecta a cualquier avance en el proyecto de Akkuyu, que se ubicará en una región proclive a terremotos graves, lo que no solo supone una amenaza importante para Turquía, sino también para la región del Mediterráneo en su conjunto;
41. Reconoce que Turquía puede llevar a cabo su propia política exterior en consonancia con sus intereses y objetivos, pero espera que esta política se defienda a través de la diplomacia y el diálogo basados en el Derecho internacional y, dado que Turquía es un país candidato a la adhesión a la Unión, se ajuste cada vez más al de la Unión; opina que la cooperación entre la Unión y Turquía en materia de política exterior y de

seguridad reviste una importancia fundamental y que las futuras estructuras de seguridad de la Unión, en particular en los países vecinos, requieren una cooperación estratégica y una mejor comunicación con Turquía para ser eficaces; considera que puede lograrse una mayor cooperación entre la Unión y Turquía en múltiples ámbitos de la política exterior, por ejemplo, en relación con Ucrania y Afganistán; recuerda, por otra parte, que la Unión y la OTAN siguen siendo los socios más fiables a largo plazo para Turquía en la cooperación en materia de seguridad internacional y pide a Turquía que mantenga la coherencia política en materia de política exterior y de seguridad, con arreglo a su condición de miembro de la OTAN y de país candidato a la adhesión a la Unión; pide al Gobierno turco que trate de buena fe las solicitudes de adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia, que participe con ánimo constructivo en los esfuerzos por resolver posibles cuestiones pendientes de acuerdo con los valores y los requisitos legales de la Unión y que se abstenga de ejercer presiones indebidas en este proceso; lamenta, en este contexto, que Turquía registre el nivel más bajo (14 %) de adaptación a la política exterior y de seguridad común (PESC) y a la política común de seguridad y defensa (PCSD) entre los países candidatos, y reitera su llamamiento a Turquía para que invierta esta tendencia de forma prioritaria dado el gran potencial que podría tener la acción conjunta en relación con los distintos retos en la región y a escala mundial; observa con preocupación, en este sentido, que la política exterior de Turquía ha entrado en conflicto con las prioridades de la Unión en el marco de la PESC en los últimos años, también en lo que respecta al Cáucaso, Siria, Libia e Irak;

42. Celebra el reciente acercamiento entre Turquía y Armenia en relación con la decisión de iniciar contactos bilaterales, el nombramiento de representantes especiales y la reanudación de los vuelos entre ambos países; considera que este intento es una evolución muy positiva con un efecto beneficioso para la prosperidad y la seguridad de la región; anima a ambas partes a que prosigan estos esfuerzos con vistas a normalizar plenamente sus relaciones y pide a la Unión que apoye activamente este proceso; anima a Turquía a allanar el camino para una auténtica reconciliación entre los pueblos turco y armenio, también resolviendo la disputa por el genocidio armenio, y a que respete plenamente sus obligaciones de proteger el patrimonio y otros bienes culturales armenios; expresa su esperanza de que esto pueda conducir a una dinámica de normalización de las relaciones en el Cáucaso Meridional; celebra, asimismo, los esfuerzos diplomáticos de Turquía para normalizar las relaciones con varios países de Oriente Próximo, especialmente con Israel; anima una vez más a Turquía a que reconozca el genocidio armenio;
43. Observa que, a pesar de que ha habido algunos signos de disminución de las tensiones en el Mediterráneo oriental desde el último informe sobre Turquía, recientemente se ha observado un nuevo repunte; sigue siendo plenamente consciente de que cualquier dinámica positiva puede revertirse fácilmente en cualquier momento mientras las cuestiones subyacentes sigan sin resolverse; lamenta, en este sentido, las recientes declaraciones de funcionarios turcos que cuestionan la soberanía de Grecia sobre algunas de sus islas, pues son contraproducentes y minan el entorno de seguridad en la zona; sigue instando a Turquía y a todas las partes implicadas a que participen de buena fe en la resolución pacífica de los conflictos y a que se abstengan de toda acción o amenaza unilateral; sigue pidiendo, en particular, a todas las partes que muestren un verdadero compromiso colectivo para negociar la delimitación de las zonas económicas exclusivas (ZEE) y la plataforma continental de buena fe y en consonancia con las normas y los principios internacionales; condena, en este sentido, el hostigamiento por parte de buques de guerra turcos contra los buques de investigación que realizan

inspecciones en la ZEE delimitada por la República de Chipre; condena asimismo las violaciones por parte de Turquía del espacio aéreo nacional griego, en particular los sobrevuelos de zonas habitadas y de su territorio, ya que tales acciones violan tanto la soberanía como los derechos soberanos de los Estados miembros de la Unión y son contrarios al Derecho internacional; manifiesta su total solidaridad con Grecia y la República de Chipre; reitera el derecho de la República de Chipre a celebrar acuerdos bilaterales relativos a su ZEE y a explorar y explotar sus recursos naturales con pleno respeto del Derecho internacional; observa con preocupación que no se haya retirado todavía la amenaza de *casus belli* declarada por la Gran Asamblea Nacional turca contra Grecia en 1995; acoge con satisfacción la continuación de las conversaciones exploratorias entre Grecia y Turquía sobre la delimitación de la plataforma continental y la ZEE de conformidad con el Derecho internacional; reitera su llamamiento al Gobierno turco para que firme y ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que forma parte del acervo de la Unión; apoya la invitación enviada por el Gobierno de la República de Chipre a Turquía a fin de negociar de buena fe la delimitación marítima entre sus respectivas costas, o recurrir a la Corte Internacional de Justicia, y pide a Turquía que acepte la invitación de Chipre; acoge con satisfacción la contribución turca a la seguridad del suministro de gas mediante la conexión del gasoducto transanatolio (TANAP) con el gasoducto transadriático (TAP) completo; reitera su apoyo a la propuesta del Consejo Europeo relativa a una conferencia multilateral sobre el Mediterráneo oriental y subraya que el Pacto Verde y la transición energética podrían ofrecer importantes oportunidades para alcanzar soluciones energéticas cooperativas e inclusivas en el Mediterráneo oriental; pide que el Mediterráneo oriental se convierta en un verdadero catalizador en la dimensión exterior del Pacto Verde;

44. Lamenta que el problema de Chipre siga sin resolverse y subraya que una solución acorde con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y dentro de un marco acordado tendrá un impacto positivo en las relaciones de Turquía con la Unión; reitera enérgicamente su opinión de que la única solución sostenible a la cuestión chipriota es una solución justa, global y viable, incluidos sus aspectos externos, en el marco de las Naciones Unidas, sobre la base de una federación bicomunitaria y bizonal con una única personalidad jurídica internacional, una única soberanía, una única ciudadanía e igualdad política, tal y como se establece en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de conformidad con el Derecho internacional y sobre la base del respeto de los principios en los que se fundamenta la Unión; lamenta que el Gobierno turco haya abandonado la base acordada de la solución y el marco de las Naciones Unidas para defender en solitario una solución de dos Estados en Chipre; pide a Turquía que abandone esta inaceptable propuesta de solución de dos Estados; pide asimismo a Turquía que retire sus tropas de Chipre y se abstenga de toda acción unilateral que pueda prolongar la división permanente de la isla y que se abstenga de cualquier acción que altere el equilibrio demográfico; condena la firma del denominado Protocolo Económico y Financiero entre Turquía y las zonas de Chipre no controladas por el Gobierno; condena que Turquía siga violando las Resoluciones 550(1984) y 789(1992) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en las que se pide a Turquía que transfiera la zona de Varosha a sus legítimos habitantes bajo la administración temporal de las Naciones Unidas, apoyando la apertura de la ciudad de Varosha al público; estima que esta medida socava la confianza mutua y, por tanto, la perspectiva de reanudar las conversaciones directas sobre una solución global del problema chipriota; expresa, a

este respecto, su profunda preocupación por las nuevas actividades ilegales llevadas a cabo recientemente en la zona vedada de Varosha con ocasión de la apertura de una nueva parte de la playa, así como por la reciente firma del «Protocolo Económico Financiero» mencionado mediante el cual Turquía financiará proyectos para la reconstrucción de Varosha; pide al Gobierno turco que regrese al diálogo basado en el formato de las Naciones Unidas, que constituye el único camino viable hacia la reconciliación; insta a que se reanuden las negociaciones sobre la reunificación de Chipre bajo los auspicios del secretario general de las Naciones Unidas lo antes posible desde el punto en el que se abandonaron en Crans-Montana en 2017; reitera su llamamiento a Turquía para que cumpla su obligación de aplicar íntegramente y de manera no discriminatoria el Protocolo Adicional del Acuerdo de Ankara respecto de todos los Estados miembros, incluida la República de Chipre; lamenta que Turquía no haya avanzado aún en la normalización de sus relaciones con la República de Chipre; subraya que la cooperación sigue siendo esencial en ámbitos como la justicia y los asuntos de interior, así como la legislación en materia de aviación y las comunicaciones de tráfico aéreo con todos los Estados miembros de la Unión, incluida la República de Chipre;

45. Pide a Turquía que conceda a la comunidad turcochipriota el espacio necesario en este sentido para actuar de conformidad con su papel de comunidad legítima de la isla, derecho garantizado por la Constitución de la República de Chipre; pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para colaborar con la comunidad turcochipriota, recordando que su lugar se encuentra en la Unión; pide a todas las partes implicadas que adopten un enfoque más valiente a la hora de acercar a las comunidades; destaca la necesidad de que el acervo de la Unión se aplique en toda la isla siguiendo la solución global del problema chipriota y destaca, al mismo tiempo, que la República de Chipre es responsable de redoblar sus esfuerzos para facilitar el compromiso de los turcochipriotas con la Unión; elogia la importante labor del Comité sobre Personas Desaparecidas bicomunitario y encomia nuevamente que, tras la peor fase de la pandemia, Turquía esté facilitando gradualmente al Comité acceso una vez más a los lugares pertinentes, incluidas las zonas militares; pide a Turquía que redoble sus esfuerzos para facilitar información crucial procedente de sus archivos militares así como el acceso a testigos en zonas cerradas; pide a Turquía que coopere con las organizaciones internacionales pertinentes, en especial el Consejo de Europa, para prevenir y combatir el tráfico ilícito y la destrucción deliberada de patrimonio cultural;
46. Reitera su condena de las intervenciones militares turcas en Siria, que violan el Derecho internacional y socavan la estabilidad y la seguridad de toda la región; pide a Turquía que ponga fin a su ocupación ilegal del norte de Siria y de Afrin, y reitera que las preocupaciones en materia de seguridad no pueden justificar una acción militar unilateral en un país extranjero; denuncia que Turquía y facciones locales sirias cometen abusos de los derechos de los civiles y restringen sus libertades con impunidad en los territorios ocupados por Turquía; condena el traslado ilegítimo de refugiados sirios al norte de Siria con el fin de modificar las características demográficas de una zona principalmente kurda en Siria; denuncia que Turquía sigue transfiriendo ilegalmente a ciudadanos sirios a Turquía para que se enfrenten a juicios por acusaciones de terrorismo que podrían dar lugar a cadena perpetua; condena los ataques turcos en curso y la presencia militar continua en territorio iraquí, en particular los ataques contra la región de Sinjar, de mayoría yazidí, que impiden el retorno de los yazidíes y cristianos que huyeron del Daesh en 2014;

47. Pide a Turquía que se comprometa plenamente con la resolución pacífica del conflicto en Libia bajo los auspicios de las Naciones Unidas; observa que la persistente injerencia extranjera en Libia sigue planteando un importante desafío a la aplicación del proceso de Berlín liderado por las Naciones Unidas; pide a Turquía que se adhiera plenamente al embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que coopere plenamente con la operación militar de la Unión en el Mediterráneo (EUNAVFOR MED IRINI) y que permita una cooperación eficaz entre esta y la operación Sea Guardian de la OTAN; reitera su condena de la firma de dos memorandos de entendimiento entre Turquía y Libia sobre cooperación militar y de seguridad global y sobre la delimitación de zonas marítimas, los cuales están interconectados y suponen una clara violación del Derecho internacional, de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de los derechos soberanos de los Estados miembros de la Unión; pide a Turquía que adopte un enfoque más constructivo para la estabilización de Somalia y que refuerce su coordinación política y operativa con la Unión a este respecto;

Perspectivas para las relaciones entre la Unión y Turquía

48. Insiste en que la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales deben seguir ocupando un lugar central en las relaciones entre la Unión y Turquía en cualquier marco, que deben sustentarse firmemente en los principios del Derecho internacional, el multilateralismo y las relaciones de buena vecindad; reitera que el proceso de adhesión y su enfoque basado en valores han sido el principal marco para las relaciones entre la Unión y Turquía, al ser la herramienta más poderosa para ejercer presión normativa y el mejor marco para apoyar las aspiraciones democráticas y proeuropeas de la sociedad turca y promover la convergencia con la Unión; señala que, en la fase actual, no encuentra argumentos para modificar su posición condicional relativa a la suspensión formal de las negociaciones de adhesión con Turquía; observa que, con su decisión de desafiar abiertamente las sentencias vinculantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto de Osman Kavala y otros acusados, el actual Gobierno turco ha destruido deliberadamente cualquier esperanza de reabrir su proceso de adhesión a la Unión en las circunstancias actuales; anima a ambas partes a que revisen el estado actual de sus relaciones a través de un diálogo global de alto nivel y a que estudien formas complementarias en paralelo al proceso de adhesión, por ejemplo, a través de un Acuerdo de Asociación modernizado, a fin de volver a colaborar en una asociación renovada, equilibrada y recíproca fuertemente condicionada a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos y las libertades fundamentales;
49. Observa que el estado actual de las relaciones entre la Unión y Turquía es propenso a producir resultados insatisfactorios; aboga por un reequilibrio de las relaciones sobre la base de los sólidos fundamentos de la cooperación impulsada por intereses mutuos, y mediante la creación de un clima de confianza que actualmente falta, absteniéndose al mismo tiempo de recurrir a acciones unilaterales o a declaraciones incendiarias;
50. Considera que la Unión debe seguir buscando todas las posibilidades de diálogo, entendimiento común y convergencia de las posiciones con Turquía; pide a Turquía que entable un diálogo constructivo y de buena fe, también sobre cuestiones de política exterior en las que Turquía y la Unión han estado enfrentadas, con el fin de volver a entenderse con la Unión, reanudar el diálogo y la cooperación en las relaciones de buena vecindad y retomar el proceso de reformas en Turquía; observa que las distintas prioridades de las instituciones de la Unión establecidas en los marcos existentes que

rigen las relaciones entre la Unión y Turquía hacen muy difícil encontrar una manera eficaz de avanzar; lamenta la falta de una estrategia a largo plazo, una política coherente y un liderazgo constante con respecto a Turquía dentro de la Unión; pide a los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que demuestren un liderazgo más fuerte, estratégico y basado en valores, con una adecuada rendición de cuentas ante el Parlamento; insta a las instituciones de la Unión y a sus Estados miembros a que elaboren un enfoque coherente y racionalizado en esta materia, ya que afecta a uno de nuestros vecinos y socios más grandes e importantes, sin olvidar una estrecha cooperación entre todas las instituciones de la UE; pide al SEAE que intensifique el diálogo transatlántico y la cooperación con el Gobierno de Biden en lo que respecta a sus relaciones con Turquía;

51. Considera que, como paso necesario para mejorar el estado general de las relaciones, ambas partes deben atenerse a un lenguaje respetuoso, esforzarse por combatir los prejuicios y las ideas equivocadas existentes y permitir una presentación más objetiva y completa de la imagen de la otra parte en las respectivas opiniones públicas, revirtiendo el deterioro de las percepciones mutuas; pide, desde esta perspectiva, a la Comisión que ponga en marcha una política de comunicación con la sociedad turca destinada a sensibilizar sobre la Unión; destaca que una retórica beligerante, revisionista y agresiva solamente refuerza las posiciones extremas por ambas partes y que un enfoque basado meramente en la confrontación solo beneficia a aquellos que tienen por objetivo separar a Turquía de la Unión;
52. Pide que se integre aún más a Turquía en las agendas políticas a largo plazo y con visión de futuro de la Unión sobre las cruciales transiciones ecológica y digital, así como en materia de salud, y pide a la Comisión que mantenga una actitud abierta hacia otros ámbitos políticos que podrían considerarse de interés para ambas partes, como la manera en que Turquía podría integrarse aún más en las cadenas de valor de la Unión; considera alentadora la continua y fuerte participación de la sociedad turca en los programas de la Unión, en especial en los ámbitos de la educación, la innovación, la juventud y el deporte, ya que estos ayudan a forjar relaciones interpersonales más estrechas y a sincronizar las transiciones ecológica y digital entre la Unión y Turquía; acoge con satisfacción, a este respecto, los acuerdos por los que se concede a Turquía el estatuto de asociación a Horizonte Europa, Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad para el período 2021-2027; toma nota de la creación por parte de la Comisión de una plataforma de inversión para Turquía; pide que dicha plataforma se ajuste plenamente a las prioridades políticas de la Unión y a la condicionalidad en el marco del recién creado Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus (FEDS+) a fin de determinar y coordinar, entre las instituciones financieras europeas e internacionales, oportunidades de inversión adecuadas a escala nacional y local con la vista puesta en las transiciones ecológica y digital; hace hincapié en que la estrecha participación del Parlamento en el consejo estratégico del FEDS+, responsable de dirigir las inversiones y aprobar la creación de mecanismos de inversión del FEDS+, resulta especialmente importante para garantizar la supervisión democrática de este proceso;
53. Celebra que la Gran Asamblea Nacional de Turquía acordara finalmente celebrar una reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía, que tuvo lugar en marzo de 2022, la primera de estas reuniones desde diciembre de 2018; opina que el diálogo parlamentario sigue siendo un elemento clave de las relaciones entre la Unión y Turquía y expresa su esperanza de que la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía vuelva a

funcionar correctamente;

o

o o

54. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al presidente del Consejo Europeo, al Consejo y a la Comisión, así como al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la República de Turquía, y pide que la presente Resolución se traduzcan al turco.